Chigorodó Antioquía Septiembre de 2022

Señor (a)
JUEZ(A) Civil del Circuito
(Reparto)
Chigorodó Antioquia

Respetado señor Juez

JESSICA MARCELA CARDONA VÁSQUEZ identificada con cédula de ciudadanía N°1.040.362.748, respetuosamente me permito manifestarle que comparezco ante el despacho a su digno cargo, plenamente facultada por el Artículo 86 de la Constitución Nacional en armonía con el Artículo 1 del Decreto 2591 de Noviembre 19 de 1991, mediante el presente escrito informo que instauró **ACCIÓN DE TUTELA** en contra **DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP Y LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL** representado por el Señor Rector y el señor Presidente respectivamente, o quien haga sus veces al momento de la notificación personal para que se protejan mis derechos fundamentales al **A LA IGUALDAD, DEBIDO PROCESO, ACCESO A CARGOS PÚBLICOS POR MÉRITO, CUMPLIMIENTO Y SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, AL TRABAJO Y A LA CONFIANZA LEGÍTIMA.**

HECHOS

PRIMERO: Participo en la convocatoria de municipios priorizados para el post conflicto para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía de Chigorodó Antioquía, Proceso de Selección número 834DE 2018 – Municipios priorizados para el Post Conflicto (Municipios de 5 y 6 categoría), el cual se encuentra regido por el Acuerdo No. CNSC – 2018100000 del 14 de marzo de 2019, normatividad que establece las reglas de participación, evaluación y calificación, de acuerdo a la estructura del proceso, definida en el artículo 4° de la mencionada norma, así:

1. CONVOCATORIA Y DIVULGACIÓN.
2. INSCRIPCIONES.
3. APLICACIÓN DE PRUEBAS.
 - 3.1. PRUEBA SOBRE COMPETENCIAS BÁSICAS.
 - 3.2. PRUEBA SOBRE COMPETENCIAS FUNCIONALES.
 - 3.3. VALORACIÓN DE ANTECEDENTES.
4. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS.
5. CONFORMACIÓN DE LISTAS DE LEGIBLES.
6. PERIODO DE PRUEBA. (Actuación administrativa de exclusiva competencia del nominador).

Como puede observarse, Señor la aplicación de las pruebas sobre competencias básicas y funcionales se presentó antes de la verificación de los requisitos mínimos y yo superé con éxito las pruebas a que fui sometida.

SEGUNDO: Señor Juez Yo me inscribí en la convocatoria 834 de 2018, al empleo denominado Profesional Universitario grado 01, identificado con el código OPEC 47029, ofertado en el proceso de selección 834, en el marco de la Convocatoria Municipios Priorizados para el Post Conflicto (Municipios de 5 y 6 categoría), **el cual corresponde al nivel profesional, denominación profesional Universitario grado 01 de la Alcaldía de Chigorodó Antioquía, categoría 5 y 6 y para inscribirse y ser parte de este proceso, los aspirantes debían cumplir con unos**

requisitos generales de participación, los cuales se encuentran estipulados en el artículo 9 del acuerdo entre los cuales se encuentran:

...

2. *Cumplir con alguno de los requisitos especiales de participación contemplados en el artículo 2.2.36.2.4 del Decreto 1083 de 2015, adicionado por el Decreto 1038 de 2018 (criterios diferenciadores de la población por su calidad de actores del conflicto, a saber:*

- * *Haber nacido en alguno de los 170 municipios priorizados que se encuentran relacionados en el decreto 893 de 2017.*
- * *Acreditar a través de certificado de vecindad, de estudio o laboral otorgado por autoridad competente, haber tenido calidad de residente, estudiante o trabajador al menos dos (29 años continuos o discontinuos en cualquiera de los 170 municipios priorizados por el Gobierno nacional, los cuales se encuentran relacionados en el decreto 893 de 2017.*
- * *Estar inscrito en el registro único de población Desplazada*
- * *Estar inscrito en el registro único de víctimas*
- * *Estar inscrito en el Sistema de Información de la Agencia para la reincorporación y normalización.*

TERCERO: Al observar la oferta pública de empleos de la Alcaldía de Chigorodó, encontré la existencia de la OPEC 47029, ofertada en el proceso de selección 834, en el marco de la Convocatoria 828 a 979 y 982 a 986 de 2018, 989, 1132 a 1134 y 1305 de 2019 – Convocatoria Municipios Priorizados para el Posconflicto PDET (Municipios de 5 y 6 categoría), **y analizado por mí los requisitos del cargo de Profesional Universitario grado 01 de la Alcaldía de Chigorodó Antioquía, observé que se estipuló lo siguiente: “Estudio: NBC ciencias de la salud Titulo de formación Universitaria “0” profesión en Salud Ocupacional.**

La OPEC ofertada presuntamente, cuenta con equivalencias pero una vez tocado el link no se presentan, dejando así a los participantes un criterio amplió de interpretación conforme a las normas legales que regulan la materia.

CUARTO: Es así como la suscrita aspirante al cargo de Profesional Universitaria grado 01, **es Administradora en Salud Ocupacional** y mi título profesional fue otorgado por una entidad de educación superior como es la **Corporación Universitaria Minuto de Dios**, el día 9 de septiembre de 2016, programa con registro SNIES concedido por el Ministerio de Educación Nacional, con código 91236 por ello opte, por inscribirme, en el empleo de Profesional Universitario grado 01 y que fuera ofertado en el proceso de selección 834, en el marco de la Convocatoria, donde los requisitos para el cargo eran amplios atendiendo la partícula o del Cargo como a continuación lo transcribo:

NBC: Ciencias de la Salud, título de Formación Universitaria O PROFESIÓN EN SALUD OCUPACIONAL (NEGRILLA EN MAYÚSCULA ES MÍA).

QUINTO: Señor Juez a pesar de cumplir, a cabalidad con los requisitos mínimos, para el cargo al que aspire, fui inadmitida por lo cual presente reclamación a través del aplicativo SIMO dentro de la oportunidad legal concedida, que fueron 2 días hábiles siguientes, a la fecha de publicación de resultados, es decir los días 29 y 30 de junio de 2022, reclamación que serían decidida por CNSC, a través de la ESAP y que originó la expedición de una respuesta frente a la reclamación presentada y que fuera ratificada respecto a mi inadmisión al concurso, pero este pronunciamiento, de la CNSC viola mis derechos fundamentales invocados como vulnerados como más adelante lo explicare.

SEXTO: Debo advertir al señor Juez, que dentro de la oferta pública del empleo al que aspiro, se desconocen las razones por las cuales en esta OPEC ofertada, no presenta equivalencias en lo concerniente a los requisitos de estudio, pues

consultado el aplicativo SIMO y una vez desplazado el link del empleo, esta no los muestra, dando así lugar a interpretaciones personales e injustas, dependiendo de la persona que observe los requisitos de la OPEC y el alcance de la partícula “O” **en el requisito**, situación que conlleva, a vulnerar mi derecho a la igualdad pues yo fui inadmitida al concurso público de méritos, porque a juicio del Director Técnico de Procesos de Selección de la Subdirección Nacional de Proyección Institucional Escuela Superior de Administración Pública, mediante escrito de fecha 11 de julio de 2022 y que fuera notificado en plataforma SIMO el día 7 de septiembre considera entre otros dispuso frente a mi reclamación de NO ADMISIÓN AL CONCURSO que:

“...Al respecto, la Escuela Superior de Administración Pública da respuesta en los siguientes términos: El artículo 2.2.36.2.1 del Decreto 1038 de 2018 señaló que los aspirantes de los procesos de selección en los municipios de quinta y sexta categoría identificados en el Decreto Ley 893 de 2017, únicamente deberán acreditar, sin sujeción a los señalados en el manual, los siguientes requisitos, según el empleo al cual se inscribió:

- * Nivel Asesor: Título profesional.
- * Nivel Profesional: Título profesional.
- * Nivel Técnico: Diploma de bachiller en cualquier modalidad.
- * Nivel Asistencial: Terminación y aprobación de educación básica primaria.

Los títulos de las disciplinas académicas a exigir para ocupar el empleo serán los que correspondan al (a los) núcleo(s) básico(s) del conocimiento o títulos señalados en el respectivo manual específico de funciones y de competencias laborales vigente al momento de reportar los empleos a la Comisión Nacional del Servicio Civil” (Resaltado fuera de texto original)

Así mismo, el artículo 9° del Acuerdo de Convocatoria reitera que los concursantes deben cumplir con los requisitos mínimos del empleo señalados en el artículo previamente citado.

En este sentido, haciendo el análisis de su caso particular, se observa que la OPEC en la cual se encuentra concursando es del nivel profesional, y se requería acreditar el Título profesional en Salud Ocupacional del núcleo básico de conocimiento de Ciencias de la Salud. Así las cosas, y revisada la documentación aportada oportunamente a través del aplicativo SIMO, se encuentra que:

El título obtenido en Administración en Salud Ocupacional no se encuentra dentro del título específico señalado en la OPEC, toda vez que esta indica que debe poseer título en Salud Ocupacional y no en Administración en Salud Ocupacional. (Subrayado, cursiva y negrilla es mío).

Con fundamento en lo anteriormente señalado, se confirma el resultado obtenido en la Verificación de Requisitos Mínimos (VRM) en la cual tiene el estado de No Admitido.

Adicionalmente se informa que, siguiendo lo fijado en el procedimiento de la convocatoria y el mecanismo de publicidad fijado el Artículo 33 de la Ley 909 de 2004, esta decisión se notifica con su publicación en el sitio web oficial de la CNSC www.cnsc.gov.co, enlace SIMO.

Contra la presente decisión no procede recurso alguno. (inciso 2 art. 12 del decreto 760 de 2005).

Cordialmente,

Nicolás Forero Obregón
Director Técnico de Procesos de Selección
Subdirección Nacional de Proyección Institucional
Escuela Superior de Administración Pública

SÉPTIMO: Es decir Señor Juez que se me está violando mi debido proceso administrativo por parte del Director Técnico de Procesos de Selección de la Subdirección Nacional de Proyección Institucional Escuela Superior de Administración Pública al desconocer el alcance de mi profesión de Administración en Salud Ocupacional la cual si corresponde a una profesión **“PROFESIÓN EN SALUD OCUPACIONAL”** y es indudable que las prerrogativas superiores por el indebido actuar de las entidades accionadas, desconocen que yo como aspirante al cargo y con el mejor puntaje de las pruebas comportamentales, básicas y funcionales, sí acredito todos los requisitos establecidos en el empleo en el cual me inscribo y es la razón por la cual se me concedió por parte del Departamento de Antioquía, Gobernación, la licencia para ofertar servicios de seguridad y salud en el trabajo a nivel nacional por el término de 10 años, a través de la Resolución radicada S2016060090084 del 31 /10/2016, licencia que conforme al artículo segundo de la Resolución comprende la prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo en las siguientes áreas o *campos* de acción:

1. *Investigación del accidente de trabajo de acuerdo con su competencia.*
2. *Seguridad y Salud en el Trabajo.*
3. *Diseñar Administración y ejecución del Sistema de la Seguridad y Salud en el Trabajo.*
4. *Educación y capacitación.*

ARTICULO TERCERO: La presente licencia se concede por el término de diez (10) años, es de carácter personal e intransferible, tendrá validez en todo el territorio nacional y puede solicitarse su renovación, por un término igual, en cualquier Secretaria Seccional o Distrital del país.

OCTAVO: Cabe anotar señor Juez que conforme a los presupuestos legales del acuerdo No 20181000007566 del 07 de diciembre de 2018 y que fueran establecidos por la Comisión Nacional del Servicio Nacional del Servicio civil, que en su artículo 11 parágrafo 2, expresa que la oferta pública de empleo de carrera (OPEC) fue suministrada por la Alcaldía de Chigorodó Antioquía y **es esta quien determina entre otras el manual de funciones**, es así como la suscrita aspirante, siguiendo las reglas del concurso, en virtud del acuerdo que fijó sus pautas y en atención a los parámetros establecidos en el artículo 14 numeral 3 (que expresa lo siguiente:”. *El aspirante debe verificar que cumple con las condiciones y requisitos exigidos para el ejercicio del empleo por el que va concursar en el proceso de selección) “ las cuales se encuentran definidos en el artículo 2.2.36.2.1 del decreto 1038 de 2018, teniendo en cuenta que los títulos de las disciplinas académicas serán los que corresponden a los núcleos básicos del conocimiento o **títulos señalados en el respectivo manual Especifico de funciones y competencias laborales reportados en la OPEC y en este último caso mi título profesional “es el de administradora en salud ocupacional” y encaja perfectamente en el perfil profesional requerido para el cargo pues mi TÍTULO PERTENECE AL CAMPO DE LA SALUD OCUPACIONAL (NEGRILLA EN MAYÚSCULA ES MÍA)**, y fue la razón por la cual me presente como aspirante al empleo OPEC 47029 que corresponde al cargo de Profesional Universitario Grado 01, nivel profesional, con el convencimiento errado e invencible de cumplir con todos y cada uno de los requisitos por ostentar el título de formación profesional, señalado en el manual de funciones, el cual determinó entre otros “... **O PROFESIÓN EN SALUD OCUPACIONAL (NEGRILLA EN MAYÚSCULA ES MÍA)**”.*

NOVENO: Aunado a lo expuesto en el hecho anterior, señor Juez cuento con el título profesional exactamente en una **“profesión en salud ocupacional” como lo es la Administración en Salud Ocupacional**, título universitario, que fue examinado por la Gobernación del Departamento de Antioquía, a través del Director Administrativo de Factores del Riesgo de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquía, el cual conforme a la normatividad legal vigente me

concede la licencia mediante el correspondiente acto administrativo, **para ofertar servicios de seguridad y salud en el trabajo a nivel nacional hoy salud ocupacional, acto administrativo que goza de presunción de legalidad y el cual fue concebido, conforme a los postulados de la normatividad legal Vigente como son: La Resolución número 4502 de 2012 5737 de 2013, leyes 09 de 1979 y 1562 de 2012.**

DECIMO: Señor Juez, en consonancia con lo expuesto en el hecho anterior el Ministerio de Salud, a través de la Subdirección de Riesgos Laborales y con el fin de aclarar dudas en materia de licencias y en lo respecta a la salud ocupacional, expidió un documento denominado ABC LICENCIAS SALUD OCUPACIONAL donde estipula entre otros como requisitos para obtener la licencia de salud ocupacional, por parte de una persona natural los siguientes:

Numeral 16 del ABC

...

16. Cuáles son los requisitos para que una persona natural pueda obtener la licencia en salud ocupacional?

Las personas naturales deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Fotocopia de los títulos o diplomas debidamente legalizados que demuestren el nivel académico otorgado por una institución de educación superior debidamente aprobada por el Ministerio de Educación Nacional, en cualquiera de las siguientes modalidades de formación académica:

- a. Profesional Universitario con postgrado en un área de salud ocupacional**, con título obtenido en una institución de educación superior debidamente aprobada por el Ministerio de Educación Nacional.
- b. Profesional Universitario en un área de salud ocupacional**, con título obtenido en una institución de educación superior debidamente aprobada por el Ministerio de Educación Nacional.
- c. Tecnólogo en salud ocupacional**, con título obtenido en una institución de educación superior debidamente aprobada por el Ministerio de Educación Nacional.
- d. Técnico en salud ocupacional**, con título obtenido en una institución de educación superior debidamente aprobada por el Ministerio de Educación Nacional.

Fotocopia del documento que demuestre que el programa académico cursado es de educación formal de carácter superior, conforme a lo establecido en las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 o las que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Fotocopia del pensum académico o asignaturas aprobadas que soporten los campos de acción de su formación.

Las personas naturales con títulos expedidos en el exterior, ...

Los extranjeros que van a prestar servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo ...

En el caso que los interesados en obtener licencia en salud ocupacional, anexas certificación de alguna institución de educación superior debidamente aprobada por el Ministerio de Educación Nacional con firma digital, ésta deberá cumplir con lo establecido para tal fin en la Ley 527 de 1999, o en la norma que la adicione, modifique o sustituya, por lo que previo a la expedición de la mencionada licencia, la Secretaría Seccional o Distrital de Salud, debe verificar si el programa de formación en una de las áreas que conforman la Seguridad y Salud en el Trabajo, según lo previsto en el artículo 1 de la Ley 1562 de 2012 ofrecido por la institución

de educación superior debidamente aprobada por el Ministerio de Educación Nacional, corresponde a la modalidad de educación formal de carácter superior y si el título otorgado a través de certificación electrónica, contiene la firma digitalizada del rector de dicha institución”.

DECIMO PRIMERO: Por su parte señor Juez la CNSC Y LA ESAP omitieron en mi caso en particular observar el ABC DE LICENCIAS DE SALUD OCUPACIONAL EN EL NUMERAL, el cual en el numeral 38 menciona de manera clara e inequívoca a *quienes se le puede otorgar o renovar la licencia de salud ocupacional hoy seguridad y salud en el trabajo? Respondiendo el interrogante así:*

*“...Se les podrá reconocer y renovar la Licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo a los profesionales universitarios con postgrado en salud ocupacional, a **LOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS EN UN ÁREA DE SALUD OCUPACIONAL**, a los tecnólogos salud ocupacional y técnicos en salud ocupacional, todos ellos con títulos obtenidos en una institución de Educación Superior, debidamente aprobada por el Ministerio de Educación Nacional. Tal como se establece en el artículo 4 de la de la Resolución 4502 de 2012. (Subrayado, cursiva y negrilla es mío)*

Respecto de la validación experiencia profesional en seguridad y salud en el trabajo y en qué casos? Menciona entre otros las estipulaciones contenidas en La resolución 4502 de 2012 que en su artículo 5, autorizó la validación de la experiencia profesional en seguridad y salud ocupacional en los siguientes casos:

“...LOS PROFESIONALES QUE EN SU PLAN DE ESTUDIOS HAYAN APROBADO FORMACIÓN TEÓRICO PRÁCTICA EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO..”, caso en el que me encuentro pues mi profesión en su plan de estudios tiene entre otros aspectos lo siguiente:

Administración en Salud Ocupacional, se encuentra que el componente profesional, del pensum académico esta conformado por las siguientes asignaturas, nótese señor Juez que todas tienen relación directa con lo que anteriormente se denominaba Salud Ocupacional, hoy nombrada por la norma como la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo), **así las cosas mi pensum académico está compuesto por las siguientes asignaturas:**

(Legislación en salud ocupacional - Factores de riesgos - Anatomía y fisiología - Sistema general de Seguridad social - Procesos administrativos - Riesgos Físicos - Legislación laboral - Riesgos Químicos - Técnicas educativas en salud ocupacional - Riesgos Psicosociales - Riesgos Biológicos - Epidemiología - Riesgos mecánicos y eléctricos - Medicina preventiva y del trabajo - Ergonomía - Gerencia del talento humano - Metodología de la investigación - Riesgo público - Toxicología - Gerencia estratégica - Sistemas de vigilancia epidemiológica - Auditoría y control interno - Sistema integrado de gestión.

DECIMO SEGUNDO: Sin embargo, Señor Juez los pronunciamientos dados, frente a mi reclamación no tuvieron en cuenta la *documentación aportada con el recurso y que se encuentran en el SIMO*”, pues contrario a ello podrían determinar y concluir que la suscrita aspirante sí cumplía con el requisito mínimos de Educación Superior, exigidos por el empleo a proveer. Esto en concordancia con lo expuesto por la Corte Constitucional, quien ha reconocido en el recurso de reposición una manifestación del ejercicio del derecho de petición, en un sentido tal que, de ser el caso, obliga a la administración a dar una respuesta de fondo a la solicitud formulada. Al respecto, en la Sentencia C- 007 del 18 de enero 2017, Magistrada Sustanciadora Gloria Stella Ortiz Delgado, señaló:

(...) Este Tribunal también ha reconocido esta modalidad del ejercicio del derecho de petición y ha dicho, por ejemplo, *“que el uso de los recursos señalados por las normas del Código Contencioso, **para controvertir directamente ante la administración sus decisiones, es desarrollo del***

derecho de petición, pues, a través de ellos, el administrado eleva ante la autoridad pública una petición respetuosa, que tiene como finalidad obtener la aclaración, la modificación o la revocación de un determinado acto”. En el mismo sentido, ha reiterado en diversas oportunidades que el uso de los recursos en el procedimiento administrativo y su agotamiento obligatorio para acudir, bien sea ante la jurisdicción ordinaria o ante la jurisdicción contencioso administrativa, es una expresión más del derecho de petición.

(...) Así, no le asiste razón al demandante cuando asevera que la jurisprudencia ha dicho que los recursos son un elemento estructural del núcleo esencial del derecho fundamental de petición. Lo que la Corte sí ha establecido es que se trata de una manifestación o desarrollo del derecho de petición; una forma de su ejercicio. En ese contexto, también ha establecido que el ejercicio de estos recursos está atado al núcleo esencial del derecho de petición. Lo anterior supone la obligación para la administración de dar respuesta oportuna, clara y de fondo a la solicitud formulada, lo cual exige que la respuesta se dé en los términos regulados por dicho procedimiento, siempre que éste responda a las anteriores pautas. Por lo tanto, es indudable que los recursos se guían por los principios del derecho de petición y son una modalidad de su ejercicio (...) (Subrayado fuera del texto).

Además, el artículo 80 del CPACA dispone:

ARTÍCULO 80. DECISIÓN DE LOS RECURSOS. Vencido el período probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el recurso.

La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso (Subrayado fuera del texto).

DECIMO TERCERO: Por lo expuesto considero respetuosamente que la ESAP Y CNSC para decidir o la no, mi admisión al concurso público de méritos, debía adelantar un debido proceso administrativo a fin de determinar si Yo contaba o no con una **profesión en salud ocupacional, lo cual no fue estudiado en manera alguna** pues las pruebas aportadas a la reclamación no fueron tenidas en cuenta, pues contrario a ello se me hubiera admitido al concurso, pues mi profesión de administradora en salud ocupacional me permitió obtener mi licencia para ofertar servicios de seguridad y salud en el trabajo, mediante un acto administrativo que goza de presunción de legalidad, así mismo se omitió la verificación de mi pensum académico y de otras constancias laborales que demuestra el cumplimiento íntegro de los requisitos del empleo.

DECIMO CUARTO: Es importante resaltar señor Juez que la ESAP **tampoco tuvo en cuenta, que mi profesión de Administradora en Salud ocupacional tiene un** pensum académico, el cual era concordante con el propósito y funciones del cargo ofertado en la convocatoria y el cual me ha permitido cumplir diferentes labores en las entidades donde he laborado y la falta de análisis de mi profesión de aspectos como su pensum académico, conlleva a no garantizarme, los principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica y por tanto señor Juez, estos no fueron observados en la decisión administrativa que me fue notificada por parte de la CNSC y de la ESAP el día 7 de septiembre de 2022 y tampoco se cumplieron con los principios generales del derecho, ni mucho menos se analizó mi título conforme al propósito y funciones del cargo ofertado, el cual estipulaba entre otros lo siguiente encajaba en la expresión “o profesional en salud ocupacional, la cual no delimitó en modo título alguno como lo quiere hacer la ESAP Y CNSC, máxime cuando **el propósito del cargo es:**

“...asistir al jefe de la dependencia en todo lo relacionado con el diseño e implementación de las políticas, planes y programas relacionados con los programas de salud ocupacional, de conformidad con la normatividad legal

vigente y las directrices de la ARL. de igual manera, liderar, intervenir o asesorar programas de promoción, prevención y rehabilitación tanto en el trabajador como en su ambiente laboral; de igual manera, realizar diagnósticos de la situación de salud de los empleados adscritos a la entidad, que formule propuestas de intervención de realización factible, orientadas a solucionar problemas existentes de salud ocupacional, partiendo del análisis del grado de desarrollo o del porcentaje de cumplimiento de la legislación vigente. de ese modo, se contribuye a mejorar la calidad de vida de los empleados y a elevar la productividad en todos y cada uno de los procesos desarrollados al interior de las dependencias”

DECIMO QUINTO : Tampoco observe señor Juez, que la CNSC ni la ESAP, procedieran a darme aplicación a las equivalencias establecidas en el numeral 25.1 y siguientes del artículo 25 del Decreto Ley 785 de 2005 y demás normas que eran aplicable, para los empleos del nivel profesional en la Alcaldía de Chigorodó, en este sentido, al tener en cuenta que la suscrita aspirante acreditó en SIMO para este proceso de selección, el título profesional de Administradora en Salud Ocupacional y en aplicación de la precitada equivalencia, resultaría viable que en aras de mi debido proceso, validar mi título profesional con el exigido de manera textual en el de la OPEC 47029, **O PROFESIÓN EN SALUD OCUPACIONAL.**

DECIMO SEXTO: Tampoco se detuvieron analizar mi pensum académico y certificaciones laborales con las funciones requeridas por la OPEC, ni mucho menos el alcance de mi licencia las cuales guardan relación pues las del empleo, establecían:

“Organizar la brigada de emergencia e implementar el servicio de primeros auxilios. • Elaborar y socializar informes y boletines estadísticos en relación con el manejo de la SALUD OCUPACIONAL de la entidad. • Prestar asesoría en aspectos médico-laborales, tanto en forma individual como colectiva. • Apoyar al jefe de la dependencia en la respuesta oportuna a las solicitudes y derechos de petición que se presenten en relación con el programa de SALUD OCUPACIONAL. • Desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica conjuntamente con higiene y seguridad industrial que incluirán accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, patologías relacionadas con el trabajo y ausentismo por tales causas • Formar grupos interdisciplinarios comprometidos en los planes de mejoramiento de la calidad de la prestación de los servicios de la administración, desarrollando el componente de Salud Ocupacional y Riesgos profesionales. • Evaluar puestos de trabajo desde la perspectiva de la Ergonomía aplicada a los sistemas de trabajo. • Manejar archivo de forma adecuada, el cual dé cuenta de las novedades que se presentan respecto del personal adscrito a la entidad en materia de SALUD OCUPACIONAL. • Realizar labores de apoyo en relación con el manejo del personal. • Evaluar el grado de desarrollo en Salud Ocupacional y el porcentaje de cumplimiento al interior de la administración. • Adoptar, las acciones necesarias para garantizar el sistema de gestión de la calidad y el control interno dentro de la dependencia. • Evaluar las condiciones de salud del personal adscrito a la administración, utilizando herramientas evaluativas acordes con la actividad económica de la misma. • Promover actividades de recreación, descanso y deporte como medios para la recuperación física y mental de los empleados, dentro de los programas de estilos de vida y trabajo saludables. • Presentar, informes de gestión para hacer seguimiento y evaluación a los objetivos trazados por la dependencia. • Apoyar al jefe de la dependencia en la formulación y seguimiento del plan de acción de la dependencia”

DECIMO SÉPTIMO: Ahora bien señor Juez, yo me inscribí a la OPEC 47029 con el convencimiento errado e invencible, que cumplía a cabalidad, con los requisitos del empleo pues tengo exactamente la profesión “o profesión en salud ocupacional” y

que si se hubiera observado mi debido proceso analizando detenidamente las pruebas, allegadas con la reclamación frente a mi caso y los lineamientos del ABC DE LICENCIAS SALUD OCUPACIONAL y la normatividad legal vigente como es la Resolución 4502 de 2012 y demás normas aplicables al caso, estoy segura que estará admitida y próxima para ser parte de la lista de elegibles en el primer lugar *pues yo ya presente las pruebas básicas y funcionales así como las pruebas comportamentales, donde obtuve como resultados de 71.42 y 88.10 respectivamente (resultado total de 76,42), para cada una de las pruebas a que fui sometida y donde solo existen los otros aspirantes al empleo no tienen los mismos puntajes al mío y donde he quedado en primer lugar gracias a los buenos puntajes obtenidos, pero fui inadmitida al concurso público de méritos.*

DECIMO OCTAVO: Así las cosas el pronunciamiento efectuado por la CNSC Y LA ESAP en actuación administrativa que resuelve la reclamación presentada, me genera la violación del *principio de confianza legítima* pues este ha sido violentado pues como aspirante no puede descansar en la convicción de que la autoridad se acogerá a las reglas que ella misma se comprometió a respetar y en este caso en la evaluación justa de mi título profesional generándome por demás, un perjuicio irremediable, pues es la primera vez que sacan un concurso público de méritos de estas características en el municipio al que me presente, además observó una falta de garantías, respecto a mi debido proceso administrativo, igualdad, trabajo, mérito y oportunidad y una vulneración de la confianza legítima de los ciudadanos que nos presentamos a estos procesos, pues existe una clara omisión por parte de las entidades demandadas, de analizar mi profesión de manera detenida y amplia dentro de lo que ellos denomina “**o profesión en salud ocupacional**” donde para determinar si la profesión pertenece o no este campo, se requiere analizar no solo el título obtenido de manera textual, sino que cuando se generan dudas como las que hoy se presentan se debe acudir al pensum académico, además se omitió darle el alcance legal al acto administrativo que me otorgó mi licencia de salud ocupacional, la cual goza de presunción de legalidad, la cual como puede observarse, definió mi campo de acción, mi capacidad de prestar el servicio conforme a mi nivel y formación, que reitero es de una profesional de salud ocupacional, y como si fuera poco se omitió analizar las prescripciones legales contenidas en la resolución número 4502 de 2012, sus anexos técnicos vigente para la época del concurso y demás normas concordantes que lo modifiquen, aclaren o deroguen como la Resolución número 754 de 2021 y 1151 de 2022, por la cual se establece los requisitos y el procedimiento para la expedición y renovación de la licencia de seguridad y salud en el Trabajo, sus anexos técnicos y que me son aplicables las cuales determinan que programas académicos de todos los niveles de formación ofrecidos por las instituciones de educación Superior, se encuentran dentro del campo de salud ocupacional antes seguridad y salud en el trabajo, es decir ni siquiera la ESAP ni la CNSC, efectuaron una revisión integral de las normas que regulan la salud ocupacional lo que conlleva a mi injusta inadmisión al concurso público de méritos y la violación clara de mis derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, igualdad, mérito y oportunidad es por ello que acudo a su Señoría para que estudie mi caso en forma particular y ordene amparar mis derechos fundamentales hoy vulnerados por las entidades demandadas, a fin de evitar el perjuicio irremediable que hoy se me causa máxime que analizado los puntajes de los participantes, estoy de primera en las pruebas a que fui sometida, sino que es la primera vez, que se desarrolla un concurso público de méritos en nuestro municipio, de conformidad con las prescripciones contenidas en los decretos 1038 de 2016, decreto 1083 de 2015, decreto 893 de 2017 y demás normas concordantes sobre la materia, a la fecha no cuento con otro mecanismo transitorio para evitar el perjuicio irremediable.

FUNDAMENTOS LEGALES DE LA VULNERACIÓN

Considero que las entidades demandadas, infringe manifiestamente a los derechos fundamentales: a mi debido proceso administrativo, igualdad, trabajo, mérito y oportunidad, así como la violación de la confianza legítima.

El artículo 86 de la Constitución Política, prevé la acción de tutela, como un mecanismo Judicial, subsidiario y residual, encaminado a proteger los derechos fundamentales de la persona, cuando cualquiera de estos resulte vulnerado o amenazado por la acción u omisión de la autoridad pública o particulares en los casos legalmente previstos.

Esta acción es procedente cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa Judicial, salvo que se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Por su parte respecto a la PROCEDENCIA excepcional de la tutela contra actos administrativos que reglamentan un concurso de méritos, El artículo 86 de la Constitución Política, establece que la acción de tutela “sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.

Las decisiones que se dictan en el desarrollo de un concurso de méritos para la provisión de empleos, - el nombramiento en periodo de prueba es la última de las etapas - constituyen actos de trámite y contra éstos, no proceden los recursos de la vía administrativa ni los medios de control que regula la ley 1437 de 2011 – CPACA, Por lo tanto, en el evento de presentarse en el desarrollo del concurso, la flagrante violación de un derecho fundamental, la acción de tutela para el afectado resulta procedente ante la carencia de medios de defensa judiciales más expeditos para evitar la vulneración al debido proceso.

De igual manera el CONSEJO DE ESTADO manifiesto: En relación con el tema de la procedencia de la tutela en los concursos de méritos, esta Corporación ha dicho que, en la medida en que las decisiones que se dictan a lo largo del concurso son actos de trámite y que contra dichos actos no proceden los recursos de la vía gubernativa ni las acciones contencioso-administrativas, **los demandantes carecen de otros medios de defensa judicial para lograr la reincorporación al concurso**. Así mismo, también se ha dicho que, de aceptarse, en gracia de discusión, que contra esos “actos de trámite” procede la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, es lo cierto que el citado mecanismo judicial no resulta eficaz ni idóneo para la protección de los 2 Sentencia T-441/17, Magistrado Ponente: ALBERTO ROJAS RÍOS 3 C.E. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION QUINTA, consejera ponente: SUSANA BUITRAGO VALENCIA Bogotá D. C., seis (6) de mayo de dos mil diez (2010) Rad. No.: 52001-23-31-000-2010-00021-01(AC) Actor: INES LORENA VARELA CHAMORRO Demandado: COMISION DE CARRERA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y OTRO derecho fundamental que normalmente se invocan en esa clase de demandas. (Destacado fuera de texto).

PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA RESPECTO DE DETERMINACIONES ADOPTADAS EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE EMPLEOS PÚBLICOS.

La jurisprudencia del máximo Tribunal Constitucional Colombiano, respecto a la procedencia excepcional de la acción de tutela para controvertir decisiones tomadas al interior de los concursos de méritos adelantados para la provisión de cargos de carrera administrativa, ha establecido: “El carácter subsidiario de la acción de tutela impone al interesado la obligación de desplegar todo su actuar dirigido a poner en marcha los medios ordinarios para la protección de sus derechos fundamentales. Este imperativo constitucional pone de relieve que para solicitar el amparo de un derecho fundamental, el peticionario debe haber actuado con diligencia en los procesos y procedimientos ordinarios, 19 Folios 372 a 393. 20 Sentencia T-

180/2015 M.P. JORGE IVÁN PALACIO PALACIO, pero también que la falta injustificada de agotamiento de los recursos legales deviene en la improcedencia de la acción de tutela.

En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que el juez debe analizar, en cada caso concreto, si los otros mecanismos judiciales disponibles permiten ejercer la defensa de los derechos constitucionales fundamentales de los individuos, logrando su protección efectiva e integral.

Ahora bien, en lo que se refiere a las decisiones que se adoptan dentro de un concurso de méritos, esta Corporación ha sostenido que si bien los afectados pueden acudir a las acciones señaladas en el Estatuto Procesal Administrativo para controvertirlas, en algunos casos las vías ordinarias no resultan idóneas y eficaces para restaurar los derechos fundamentales conculcados, ya que no suponen un remedio pronto e integral para los aspirantes y la mayoría de veces debido a la congestión del aparato jurisdiccional, el agotamiento de las mismas implica la prolongación de la vulneración en el tiempo. (...) Entonces, en ciertas circunstancias los mecanismos judiciales de defensa existentes en el ordenamiento jurídico para impugnar las decisiones adoptadas dentro de un trámite de concurso de méritos, debido a su complejidad y duración, carecen de idoneidad y eficacia para proteger los derechos fundamentales al acceso a la función pública y al trabajo.

La Corte ha resaltado que la provisión de empleos a través de concurso busca la satisfacción de los fines del Estado y garantiza el derecho fundamental de acceso a la función pública. Por ello, la elección oportuna del concursante que reúne las calidades y el mérito asegura el buen servicio administrativo y requiere de decisiones rápidas respecto de las controversias que surjan entre los participantes y la entidad. Así las cosas, este Tribunal ha entendido que la acción de tutela es un mecanismo excepcional de defensa de los derechos fundamentales de las personas participan en un proceso de selección de personal público y son víctimas de un presunto desconocimiento de cualquiera de sus derechos fundamentales.”.

De la procedencia excepcional de la acción de tutela en tratándose de concursos de méritos.

Debe recordarse que la acción de tutela, es un mecanismo residual y subsidiario de protección de los derechos constitucionales, en tanto que su procedibilidad está condicionada a que no existan otros medios de defensa –verbo y gracia agotamiento de recursos que fueren procedentes- o que existiendo otros, se constituya transitoriamente en el medio idóneo, con el fin de evitar la estructuración de un perjuicio irremediable.

Tratándose de concurso de méritos, la Corte Constitucional ha puesto de relieve que pese a que en tales procesos los concursantes están en la posibilidad de ejercer vías ordinarias –por ejemplo, mediante el uso de los medios de control previstos en el Código General del Proceso y de lo Contencioso Administrativo-, en ocasiones, las mismas en el curso de los procesos meritocráticos pueden no ser el instrumento idóneo y eficaz para proteger y/o restablecer el derecho fundamental que eventualmente se encuentre conculcado, tornándose en la acción de tutela en el instrumento procedente, al respecto ha indicado el Alto Tribunal Constitucional:

“(…) en materia de concursos de méritos para la provisión de cargos de carrera se ha comprobado que para excluir a la tutela en estos casos, el medio judicial debe ser eficaz y conducente, pues se trata nada menos que de la defensa y realización de derechos fundamentales, ya que no tendría objeto alguno enervar el mecanismo de tutela para sustituirlo por un instrumento previsto en el ordenamiento legal que no garantice la supremacía de la Constitución en el caso particular”. Postura reiterada entre otras, en la sentencia T-059 de 2019: “Por último, es importante poner de presente que, pese a que se podría sostener que la pretensión de la acción de tutela, se podría satisfacer mediante la solicitud de medidas cautelares, lo cierto es que

en el fondo se plantea una tensión que involucra el principio de mérito como garantía de acceso a la función pública y ello, a todas luces, trasciende de un ámbito administrativo y se convierte en un asunto de carácter constitucional, que torna necesaria una decisión pronta, eficaz y que garantice la protección de los derechos fundamentales. // Lo anterior, en la medida en que tal y como se estableció en las Sentencias C-645 de 2017, C-588 de 2009, C-553 de 2010, C-249 de 2012 y SU-539 de 2012, el mérito es un principio fundante del Estado colombiano y del actual modelo democrático, en la medida en que tiene un triple fundamento histórico, conceptual y teleológico. En efecto, el principio del mérito se estableció en el ordenamiento jurídico con la finalidad de proscribir las prácticas clientelistas, para garantizar un medio objetivo de acceso, permanencia y retiro del servicio público y, por último, para hacer efectivos otros derechos que encuentran garantía plena a través de éste, al tiempo que se materializan los principios de la función administrativa, previstos en el artículo 209 de la Constitución.”

De igual forma, en la sentencia T-340 de 2020, la Corte Constitucional ratificó la vigencia de su precedente, acerca de la procedencia de la acción de tutela para discutir controversias que involucran derechos fundamentales de los participantes en el marco de los concursos de méritos:

“(…) Ahora bien, desde una perspectiva general, la Corte ha sostenido que, pese a la existencia de las vías de reclamación en lo contencioso administrativo, existen dos hipótesis que permiten la procedencia excepcional de la acción de tutela. La primera, se presenta cuando existe el riesgo de ocurrencia de un perjuicio irremediable, causal que tiene plena legitimación a partir del contenido mismo del artículo 86 del Texto Superior y, por virtud de la cual, se le ha reconocido su carácter de mecanismo subsidiario de defensa judicial. Y, la segunda, cuando el medio existente no brinda los elementos pertinentes de idoneidad y eficacia para resolver la controversia, a partir de la naturaleza de la disputa, de los hechos del caso y de su impacto respecto de derechos o garantías constitucionales. (...) En este orden de ideas, se concluye que la acción de tutela es procedente por vía de excepción para cuestionar actos administrativos dictados en desarrollo de un concurso de méritos, y que, más allá de la causal del perjuicio irremediable, cabe examinar la eficacia en concreto del medio existente y de la viabilidad sumaria de las medidas cautelares, teniendo en cuenta, como ya se dijo, la naturaleza de la disputa, los hechos del caso y su impacto respecto de derechos, principios o garantías constitucionales, siendo, prevalente, en este escenario, la protección del mérito como principio fundante del Estado colombiano y del actual modelo democrático, como lo señaló expresamente Sentencia T-059 de 2019”

En tal sentido, los medios ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico, generalmente carecen de la suficiente idoneidad en el caso de los concursos de méritos, en tanto que no tendrían una eficacia similar a la presente acción constitucional, debido a la complejidad y duración que pudieran implicar los instrumentos ordinarios, si se tiene en consideración que el concurso de méritos discutido se encuentra en su última etapa y el riesgo inminente a que se estructure un perjuicio irremediable, por lo que para este Juzgado se cumplen los supuestos bajo los cuales es posible acudir a este mecanismo constitucional, acorde con los reiterativos precedentes jurisprudenciales vinculantes sobre la materia. De los procesos meritocráticos para acceder a cargos públicos, el precepto 125 de la Constitución Política, contempla que por regla general los empleos en los órganos del Estado deben ser de carrera administrativa, a excepción de aquellos que sean de elección popular, de libre nombramiento y remoción, los de los trabajadores oficiales y los demás que determine la ley, en los siguientes términos: “Artículo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público. El ingreso a los cargos de carrera y el

ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes. El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley. En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción. Conforme a lo anterior, el ingreso a los cargos de carrera en el Estado, deben fundamentarse en el mérito, en las calidades del servidor público y en una selección objetiva, para lo cual se ha establecido que los concursos públicos son el instrumento o mecanismo idóneo que posibilita la evaluación y determinación de la capacidad de los aspirantes para asumir las funciones propias del cargo a desempeñar, impidiendo la subjetividad o arbitrariedad por parte del nominador. Los concursos buscan la satisfacción de los fines del Estado y garantizar el derecho fundamental de acceso a la función pública. Por ello, la elección oportuna del concursante que reúne las calidades y el mérito asegura el buen servicio administrativo. Del debido proceso, el artículo 29 Superior, eleva a rango de derecho fundamental el debido proceso y prevé que éste es aplicable tanto en las actuaciones judiciales como en las administrativas, es decir, que obliga no solamente a los jueces sino también a los organismos y dependencias de la administración pública, o a los particulares que ejerzan función administrativa; este derecho fundamental, debe entenderse como una manifestación del Estado Social y Constitucional de Derecho que busca proteger al individuo frente a las actuaciones de las autoridades públicas, procurando en todo momento el respeto a las formas propias de cada juicio. Así entonces, las situaciones de controversia que surjan de cualquier tipo de proceso, requieren de una regulación jurídica previa que limite los poderes del Estado y establezcan el respeto de los derechos y obligaciones de los sujetos procesales, de manera que ninguna actuación de las autoridades dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos señalados en la ley o los reglamentos. El debido proceso comprende un conjunto de principios, tales como el de legalidad, el del juez natural, el de favorabilidad en materia penal, el de presunción de inocencia, el de tipicidad, el de antijuridicidad y el derecho de defensa o contradicción, los cuales constituyen verdaderos derechos fundamentales. El derecho de defensa en materia administrativa se traduce en la facultad que tiene el administrado para conocer la actuación o proceso administrativo que se le adelanta e impugnar o contradecir las pruebas y las providencias que le sean adversas a sus intereses; la administración debe garantizar al ciudadano interesado tal derecho y cualquier actuación que desconozca dicha garantía es contraria a la Constitución.

EL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA

Es violentado si el aspirante no puede descansar en la convicción de que la autoridad se acogerá a las reglas que ella misma se comprometió a respetar.

PRINCIPIO DE LA CONFIANZA LEGITIMA

El mencionado principio es entendido, en términos amplios, como una exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada, a la cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de los particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial del sistema jurídico. Teniendo en cuenta lo establecido en la Sentencia C-131/04 donde La Corte al estimar que la interpretación judicial debe estar acompañada de una necesaria certidumbre y que el fallador debe abstenerse de operar cambios intempestivos en la interpretación que de las normas jurídicas venía realizando, y, por ende, el ciudadano puede invocar a su favor, en estos casos, el respeto por el principio de la confianza legítima.

En esencia, la confianza legítima consiste en que el ciudadano debe poder evolucionar en un medio jurídico estable y previsible, en el cual pueda confiar. Para Müller, este vocablo significa en términos muy generales, que ciertas expectativas, que son suscitadas por un sujeto de derecho en razón de un determinado comportamiento en relación con otro, o ante la comunidad jurídica en su conjunto, y que producen determinados efectos jurídicos; y si se trata de autoridades públicas, consiste en que la obligación para las mismas de preservar un comportamiento consecuente, no contradictorio frente a los particulares, surgido de un acto o acciones anteriores, incluso ilegales, salvo interés público imperioso contrario. Se trata, por tanto, que el particular debe ser protegido frente a cambios bruscos e inesperados efectuados por las autoridades públicas. En tal sentido, no se trata de amparar situaciones en las cuales el administrado sea titular de un derecho adquirido, ya que su posición jurídica es susceptible de ser modificada por la administración. Es decir, se trata de una mera expectativa en que una determinada situación de hecho o regulación.

DERECHO A LA VIGENCIA, CUMPLIMIENTO, INTEGRIDAD Y PRIMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA:

Todas las autoridades públicas, tienen la obligación de dar cumplimiento y hacer cumplir la Constitución Política, como la norma superior o norma de normas, como lo consagra su preámbulo con su fuerza vinculante reconocida no es un postulado literal sin vida, debe ser aplicado para que rija, tenga efectos vinculantes para el estado y la sociedad civil, así mismo el carácter de nuestro estado como social de derecho, no debe ser una mera afirmación retórica o un símbolo sin efectos, es un poder legítimo pero subordinado a un orden jurídico que tiene como norte el encontrarse con el valor de lo justo o de la justicia.

Con respecto al carácter de fundamental del derecho a la integridad y primacía de la constitución, la corte constitucional mediante la sentencia 06 de mayo 12 de 1992, magistrado ponente, Doctor EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, se pronunció al respecto manifestando literalmente lo siguiente”: ...Con lo anterior quiere destacarse que la integridad y la primacía de la constitución, consagra por virtud del querer soberano del pueblo, es un derecho fundamental de las personas que bajo distintas formas –acción de inexequibilidad, acción de nulidad, excepción de constitucionalidad, cumplimiento y obtener, cuando no sea así. Que los poderes públicos ejerzan sus competencias dentro de los límites de la constitución, se inspiren en sus valores y principios y se respeten, en todas las circunstancias, los derechos y garantías de las personas...”

El amparo especial consagrado en el Artículo 86 de la Carta Política, se instituyó para proteger los Derechos Fundamentales de las personas ante cualquier violación o amenaza por parte de los órganos de la Administración y aún de los particulares, en los casos expresamente previstos en el Artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario de esta acción. En desarrollo de dicha disposición superior y, en concordancia con lo previsto en los artículos 1º, 5, 6, 8, 10 y 42 del Decreto 2591 de 1991.

Frente al derecho de petición, la Corte Constitucional, ha señalado: “La jurisprudencia constitucional ha establecido que el núcleo esencial del derecho fundamental de petición comprende los siguientes cuatro elementos: **(i)** la posibilidad cierta y efectiva de presentar, de manera respetuosa, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o tramitarlas; **(ii)** la facultad de obtener una resolución pronta y oportuna de la cuestión en los términos consagrados en la ley; **(iii)** el derecho a que sea resuelta de fondo, de manera clara, precisa y congruente con lo solicitado, y **(iv)** la pronta comunicación al peticionario acerca de la decisión o información requerida. 4.3 Resulta igualmente importante señalar que la jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en señalar que para que el derecho de petición sea efectivamente respondido, la respuesta al mismo ha

de ser **(i)** suficiente, cuando quiera que resuelva materialmente la petición y satisfaga los requerimientos del solicitante, sin que por ello excluya la posibilidad de que la respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario; **(ii)** efectiva, si soluciona el caso que se plantea y **(iii)** congruente si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, lo que supone que la solución o respuesta verse sobre lo preguntado y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición, sin que se excluya la posibilidad de suministrar información adicional que se encuentre relacionada con la petición propuesta. De esta manera, solo se entenderá que el derecho de petición se encuentra garantizado cuando la respuesta al requerimiento hecho por el particular cumple con los anteriores aspectos. 1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T.101 del 25 de febrero de 2014. M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub (...) Respecto al criterio de la pronta resolución del derecho de petición, debe anotarse que la jurisprudencia constitucional ha sido igualmente clara en señalar que, si la entidad requerida por vía de un derecho de petición, no puede dar respuesta de manera oportuna a la solicitud, ésta deberá informar acerca de los inconvenientes para dar una respuesta de fondo en ese momento, debiendo indicar en todo caso, el plazo aproximado dentro del cual absolverá de manera efectiva tal petición. 4.7 De esta manera, las respuestas que incumplan con los requisitos señalados en el artículo 23 Superior, condenan al peticionario a una situación de incertidumbre, por cuanto éste no logra aclarar sus inquietudes, especialmente si se considera que, en muchos eventos, de esa respuesta depende el ejercicio de otros derechos subjetivos”. (Negrillas del despacho).

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

Artículo 29 Constitución Nacional (debido proceso)

Frente a este derecho la corte constitucional ha expresado que es procedente interponer la acción de tutela para la garantía de los derechos y los daños que una actuación de la administración genera en los administrados. frente a esto, la corte constitucional expresa en la sentencia T-441 de 2017 lo siguiente:

“la doctrina constitucional ha reiterado que al estar en juego la protección de los derechos fundamentales al trabajo, la igualdad y el debido proceso de quienes participaron en un concurso de méritos y fueron debidamente seleccionados, la Corte Constitucional asume competencia plena y directa, aun existiendo otro mecanismo de defensa judicial, al considerar que la tutela puede “desplazar la respectiva instancia ordinaria para convertirse en la vía principal de trámite del asunto”[18], en aquellos casos en que el mecanismo alterno no es lo suficientemente idóneo y eficaz para la protección de estos derechos.[19] (subraya mía).

Considera la Corte que en materia de concursos de méritos para la provisión de cargos de carrera se ha comprobado que no se encuentra solución efectiva ni oportuna acudiendo a un proceso ordinario o contencioso, en la medida que su trámite llevaría a extender en el tiempo de manera injustificada la vulneración de derechos fundamentales que requieren de protección inmediata. Esta Corte ha expresado, que para excluir a la tutela en estos casos, el medio judicial debe ser eficaz y conducente, pues se trata nada menos que de la defensa y realización de derechos fundamentales, ya que no tendría objeto alguno enervar el mecanismo de tutela para sustituirlo por un instrumento previsto en el ordenamiento legal que no garantice la supremacía de la Constitución en el caso particular[20].” (subraya mía).

Frente al debido proceso es menester decir que en la presente acción de tutela se encuentra vulnerado mis derechos fundamentales, toda vez que la CNSC ni la ESAP evaluaron en debida forma mi título profesional como “o profesión en salud ocupacional” sino que su interpretación se dio de manera restrictiva y no amplia como se observa en el requisito.

EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO.

Sentencia C-341/14

(Bogotá, D.C., 4 de junio de 2014)

La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido proceso: **(i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley; (iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso; (iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables; (v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas. (el subrayado es mío)**

Sentencia T-442 de 1992

El debido proceso como derecho fundamental, se encuentra consagrado expresamente en el artículo 29 de la Constitución Política, y como primer elemento cabe resaltar su aplicación no solo para los juicios y procedimientos judiciales, sino también para todas las actuaciones administrativas, cuando establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales o administrativas”. La jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que la extensión del debido proceso a las actuaciones administrativas, tiene por objeto garantizar la correcta producción de los actos administrativos, y extiende su cobertura al ejercicio de la administración pública, en la realización de sus objetivos y fines estatales, cobijando todas sus manifestaciones, “en cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las peticiones que realicen los particulares, a los procesos que por motivo y con ocasión de sus funciones cada entidad administrativa debe desarrollar y desde luego, garantiza la defensa ciudadana al señalarle los medios de impugnación previstos respecto de las providencias administrativas, cuando crea el particular, que a través de ellas se hayan afectado sus intereses”.

PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE LA TUTELA EN CONCURSO DE MÉRITOS.

De tiempo atrás la Jurisprudencia aceptaba la procedencia excepcional de la acción de tutela a efectos de la protección de los derechos fundamentales de quien ha participado en un concurso de méritos, pese a existir el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el cual se toma ineficaz cuando las circunstancias particulares denoten un perjuicio irremediable: *“La Corte ha indicado que, en principio, la acción de tutela no procede para controvertir actos Administrativos que reglamentan o ejecutan un proceso de concurso de méritos, Sin embargo, posteriormente la jurisprudencia constitucional encontró que existen, al menos, dos excepciones a la regla antes planteada. En primer lugar, se trata de aquellos casos en los que la persona afectada no tiene mecanismo distinto de la acción de tutela, para defender eficazmente sus derechos porque no está legitimada para impugnar los actos administrativos que los vulneran o porque la cuestión debatida es eminentemente constitucional. En segundo lugar, procede la tutela cuando, por las circunstancias excepcionales del caso concreto, es posible afirmar que, de no producirse la orden de amparo, podrían resultar irremediablemente afectados los derechos fundamentales de la persona que interpone la acción, Estos casos son más complejos que los que aparecen cobijados por la excepción anterior, pues en ellos existen cuestiones legales o reglamentarias que, en principio, deben ser definidas por el juez contencioso administrativo pero que dadas las circunstancias concretas y la inminente consumación de un daño ius fundamental deben ser, al menos transitoriamente, resueltas por el juez constitucional”*.

PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA RESPECTO DE DETERMINACIONES ADOPTADAS EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE EMPLEOS PÚBLICOS.

La jurisprudencia del máximo Tribunal Constitucional Colombiano, respecto a la procedencia excepcional de la acción de tutela para controvertir decisiones tomadas al interior de los concursos de méritos adelantados para la provisión de cargos de carrera administrativa, ha establecido: *“El carácter subsidiario de la acción de tutela impone al interesado la obligación de desplegar todo su actuar dirigido a poner en marcha los medios ordinarios para la protección de sus derechos fundamentales. Este imperativo constitucional pone de relieve que para solicitar el amparo de un derecho fundamental, el peticionario debe haber actuado con diligencia en los procesos y procedimientos ordinarios, 19 Folios 372 a 393. 20 Sentencia T- 180/2015 M.P. JORGE IVAN PALACIO PALACIO, pero también que la falta injustificada de agotamiento de los recursos legales deviene en la improcedencia de la acción de tutela. En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que el juez debe analizar, en cada caso concreto, si los otros mecanismos judiciales disponibles permiten ejercer la defensa de los derechos constitucionales fundamentales de los individuos, logrando su protección efectiva e integral. Ahora bien, en lo que se refiere a las decisiones que se adoptan dentro de un concurso de méritos, esta Corporación ha sostenido que si bien los afectados pueden acudir a las acciones señaladas en el Estatuto Procesal Administrativo para controvertirlas, en algunos casos las vías ordinarias no resultan idóneas y eficaces para restaurar los derechos fundamentales conculcados, ya que no suponen un remedio pronto e integral para los aspirantes y la mayoría de veces debido a la congestión del aparato jurisdiccional, el agotamiento de las mismas implica la prolongación de la vulneración en el tiempo. (..) Entonces, en ciertas circunstancias los mecanismos judiciales de defensa existentes en el ordenamiento jurídico para impugnar las decisiones adoptadas dentro de un trámite de concurso de méritos, debido a su complejidad y duración, carecen de idoneidad y eficacia para proteger los derechos fundamentales al acceso a la función pública y al trabajo. La Corte ha resaltado que la provisión de empleos a través de concurso busca la satisfacción de los fines del Estado y garantiza el derecho fundamental de acceso a la función pública. Por ello, la elección oportuna del concursante que reúne las calidades y el mérito asegura*

el buen servicio administrativo y requiere de decisiones rápidas respecto de las controversias que surjan entre los participantes y la entidad. Así las cosas, este Tribunal ha entendido que la acción de tutela es un mecanismo excepcional de defensa de los derechos fundamentales de las personas participan en un proceso de selección de personal público y son víctimas de un presunto desconocimiento de cualquiera de sus derechos fundamentales.”

DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA Además de las consideraciones de hecho y de derecho sobre la vulneración de derechos fundamentales, es importante destacar que la jurisprudencia ha determinado que la acción de tutela es procedente dado que en los concursos de méritos no puede aplicarse una tarifa legal por la mera existencia de otro medio jurídico disponible, -la cual podría ser una Acción de nulidad y restablecimiento del derecho-, lo anterior porque la eficacia de la justicia frente a la presunta vulneración de los derechos fundamentales estaría comprometida y así lo compiló una sentencia en sede de tutela que recordó los precedentes jurisprudenciales con sentencias de unificación que bien aplican en el presente caso. Sentencia T- 059 de 2019 “En igual sentido, en la sentencia SU-913 de 2009 la Sala Plena de la Corte consideró que “en materia de concursos de méritos para la provisión de cargos de carrera se ha comprobado que no se encuentra solución efectiva ni oportuna acudiendo a un proceso ordinario o contencioso –administrativo-, en la medida que su trámite llevaría a extender en el tiempo de manera injustificada la vulneración de derechos fundamentales que requieren de protección inmediata. Esta Corte ha expresado, que para excluir a la tutela en estos casos, el medio judicial debe ser eficaz y conducente, pues se trata nada menos que de la defensa y realización de derechos fundamentales, ya que no tendría objeto alguno enervar el mecanismo de tutela para sustituirlo por un instrumento previsto en el ordenamiento legal que no garantice la supremacía de la Constitución en el caso particular” (Subrayas y negrillas mías) Aunque la sentencia de unificación fue antes del nuevo código administrativo, de la misma manera siguió describiendo la actualización jurisprudencial indicando: Ahora bien, recientemente, mediante la sentencia SU-691 de 2017, la Sala Plena tuvo la posibilidad de pronunciarse nuevamente respecto de la eficacia de los medios de defensa previstos en el ordenamiento jurídico ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y de las medidas cautelares que pueden ser decretadas por el juez. En esa providencia, esta Corte consideró que estas nuevas herramientas permiten garantizar la protección de los derechos de forma igual o, incluso superior a la acción de tutela en los juicios administrativos, pero ello no significa la improcedencia automática y absoluta de la acción de tutela como mecanismo de protección subsidiario de los derechos fundamentales, ya que los jueces constitucionales tienen la obligación de realizar, de conformidad con el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, un juicio de idoneidad en abstracto y otro de eficacia en concreto de los medios de defensa alternos y, en ese sentido, están obligados a considerar: “(i) el contenido de la pretensión y (ii) las condiciones de los sujetos involucrados”. (subrayas y negrillas mías) Dada la cercanía a la fecha de las pruebas escritas (5 de julio) de la cual fui excluida, no cuento con un mecanismo jurídico eficaz para la protección de mis derechos fundamentales, por ello la acción de tutela es mi única opción para evitar el perjuicio irremediable.

DEL PERJUICIO IRREMEDIABLE

La acción de tutela se enfoca a evitar el perjuicio irremediable en los términos que lo ha definido la Corte Constitucional, que en Sentencia T-180 de 2019 reitera los criterios a saber: En relación con la figura del perjuicio irremediable,

esta Corte ha señalado que, para que se torne en procedente la acción de tutela, se deben reunir los siguientes requisitos: “(i) que se trate de un hecho cierto e inminente; (ii) que las medidas a tomar deben ser urgentes; (iii) que la situación a la que se enfrenta la persona es grave; y finalmente (iv) que las actuaciones de protección han de ser impostergables” **Los elementos para la configuración del perjuicio irremediable se encuentran presentes en mi caso, dado que:**

1. Es un hecho cierto que fui inadmitida al concurso, sin contar a la fecha con otro recurso jurídico posible, pues la decisión de la inadmisión no tiene recurso alguno.
2. Señor Juez en cualquier momento se expedirá, la lista de elegibles que es lo único que falta por expedirse en el concurso y por lo tanto es urgente la resolución de mi amparo constitucional, a fin de continuar en el concurso y ser nombrada en el cargo pues verificado los puntajes a la fecha soy la que tengo los mejores y voy de primera.
3. La inadmisión al concurso público de méritos, me afectan gravemente por cuanto me impide seguir participando del concurso público y finalmente.
4. Resulta impostergable la decisión de protección constitucional en cuanto después de expedida la lista de elegibles, no habrá posibilidad de modificar la lista máxime que esta de manera rápida cobra firmeza.

REQUISITO DE INMEDIATEZ.

En este caso se cumple con el requisito de inmediatez que establece la Corte: *“(...) es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.”*

En el presente caso, se cumple con interponer la tutela en un plazo razonable y proporcionado, pues el recurso fue respondido por la accionada el día siete(7) de septiembre de 2022, y notificada el mismo día, mediante comunicación electrónica a través de la plataforma SIMO; por esa razón, se entiende que al momento de la interposición de la presente acción hay un plazo razonable y no se ha incumplido con el requisito de inmediatez consagrado en la Constitución Política Nacional y el Decreto 2591 de 1991. H

Hechos que generaron la vulneración.

La Corte ha dicho al respecto: *“Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.” En este caso se cumple con este requisito, pues se presenta claridad sobre el fundamento de la afectación de derechos de carácter humano y fundamental.*

PRETENSIONES

Me sean tutelados los derechos fundamentales a mi debido proceso administrativo, igualdad, trabajo, mérito y oportunidad, y en consecuencia; se ordene:

PRIMERO: Que sean tutelados mis derechos fundamentales al a mi debido proceso administrativo, igualdad, trabajo, mérito y oportunidad y confianza legítima y por ende se ordene a las accionadas admitirme en el concurso y continuar en el proceso de méritos conforme a las diferentes etapas programadas en este.

SEGUNDO: Que se me garantice de manera inmediata y sin dilación alguna la protección de mis derechos fundamentales ha debido proceso administrativo, igualdad, trabajo, mérito y oportunidad y confianza legítima **Y POR ENDE SE ORDENE A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA “ESAP” Y COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL** a revisar nuevamente a la luz de la normatividad legal vigente, mi título profesional de Administradora en Salud Ocupacional, a fin de determinar si este corresponde o no a una “profesional en salud ocupacional” conforme al requisito requerido, **en la OPEC**, así mismo y en consideración a que las entidades demandadas presuntamente presentan dudas frente al alcance mi profesión, procedan a verificar el pensum académico de mi carrera profesional, así como la resolución que me otorga la licencia para prestar servicios de Seguridad y Salud en el trabajo a nivel nacional hoy salud ocupacional ,adicional a lo anterior que se verifique mi título profesional conforme al ABC LICENCIAS SALUD OCUPACIONAL, una vez surtido este trámite se proceda amparar mis derechos fundamentales invocados como vulnerados, **ordenando mi admisión al concurso público de méritos, permitiéndome continuar y participar en el concurso en igualdad de condiciones que los demás concursantes que tenemos título en lo que se denominó en la OPEC “O “ Profesión en salud ocupacional.**

TERCERO: A fin de garantizar mis derechos fundamentales que hoy se encuentran vulnerados, que se ordene la suspensión de la publicación de la lista elegibles de la OPEC 47029 de la Alcaldía de Chigorodó- Antioquía proceso de selección Proceso de Selección 828 a 979 y 982 a 986 de 2018, 989, 1132 a 1134 y 1305 de 2019 – Convocatoria Municipios Priorizados para el Posconflicto PDET, hasta que la Comisión Nacional del Servicio Civil y la ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP revisen nuevamente mí título profesional a la luz de la normatividad legal vigente, conforme a su pensum académico, licencia de salud ocupacional, el ABC de licencias de salud ocupacional y demás normas que le sean aplicables

CUARTO: Que una vez valorado mí título profesional a la luz de la normatividad legal vigente se me admita en igual de condiciones al concurso público de méritos y pueda continuar en el concurso conforme a la valoración de los diferentes componentes de evaluación y etapas dispuestas en el proceso, es así como solicito vehemente al señor Juez que una vez despachadas favorablemente las pretensiones elevadas, se procedan a realizar de forma inmediata todos los trámites necesarios para materializar mi ADMISIÓN EN EL CONCURSO y por ende se elimine todas las barreras administrativas que han sido impuestas y que están vulnerando mis derechos fundamentales y afectando gravemente mis derechos.

QUINTO: Las demás declaraciones y condenas que el señor Juez considere procedentes y conducentes ordenar, para el amparo efectivo de mis derechos fundamentales invocados como vulnerados.

SOLICITUD DE MEDIDA PROVISIONAL

El Decreto 2.591 de 1.991, por el cual se reglamenta la acción de tutela, establece que el Juez Constitucional, cuando *lo considere necesario y urgente para proteger un derecho amenazado o vulnerado “suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere”*.

En efecto, el artículo 7° de esta normatividad señala: “**ARTICULO 7o. MEDIDAS PROVISIONALES PARA PROTEGER UN DERECHO.** Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o

vulnere. Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante. La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible. El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso. El juez podrá, de oficio o a petición de parte, por resolución debidamente fundada, hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución o las otras medidas cautelares que hubiere dictado”.

La medida provisional de suspensión de un acto concreto que presuntamente amenaza o vulnera un derecho fundamental, pretende evitar que la amenaza al derecho **se convierta en violación o que la violación del derecho produzca un daño más gravoso que haga que el fallo de tutela carezca de eficacia en caso de ser amparable el derecho. Como su nombre lo indica, la medida es provisional mientras se emite el fallo de tutela, lo cual significa que la medida es independiente de la decisión final.** El Juez de Tutela podrá adoptar la medida provisional que considere pertinente para proteger el derecho, cuando expresamente lo considere necesario y urgente. Esta es una decisión discrecional que debe ser “razonada, sopesada y proporcionada a la situación planteada

Con base al artículo 7 del decreto 2591 de 1991, que expresa: (Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere...), ante la urgencia y no encontrar un mecanismo idóneo para la garantía de mis derechos fundamentales al trabajo, a la seguridad social, y al debido proceso, me veo en la tarea de interponer la acción de tutela con medida provisional toda vez que, desde el 7 de septiembre de 2022, se contestaron todas las reclamaciones a la prueba de valoración de antecedentes, lo que da a pensar que el paso siguiente es la publicación de la lista de elegibles de la OPEC 47029 -Alcaldía municipal de Chigorodó del proceso de selección Proceso de Selección 828 a 979 y 982 a 986 de 2018, 989, 1132 a 1134 y 1305 de 2019 – Convocatoria Municipios Priorizados para el Posconflicto PDET, **lo cual se espera suceda en cualquier momento** y es por ello procedente invocar esta medida de urgencia para que antes de que se expida la lista de elegibles se proceda a valorar mi título profesional conforme a la normatividad legal vigente, pues de llegarse a publicar una lista de elegibles por parte de la CNSC, obviando mis razones de derecho para tener en cuenta mi educación al momento de la calificación de la valoración, se me causaría un perjuicio irremediable pues no tendría la mínima posibilidad de ocupar el cargo por méritos.

Es por lo anterior que le solicito de la manera más respetuosa que se suspenda la publicación de la lista de elegibles de la OPEC 47029 -Alcaldía municipal de Chigorodó del proceso de selección Proceso de Selección 828 a 979 y 982 a 986 de 2018, 989, 1132 a 1134 y 1305 de 2019 – Convocatoria Municipios Priorizados para el Posconflicto PDET, hasta que se resuelva esta acción de tutela, para así evitar la consumación de un daño irremediable.

Así las cosas solicito a usted Señor Juez, proteja mis derechos fundamentales vulnerados como violados y en consecuencia ORDENE a la **COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, SUSPENDER** de manera inmediata y sin dilación alguna a partir la notificación de la medida, la expedición de la lista de elegibles, toda vez que en el trámite constitucional de 1 y segunda instancia, podría conformarse lista de elegibles y que la suscrita accionante pierda la oportunidad de ocupar un cargo de carrera administrativa por mérito, en igualdad de oportunidades, máxime cuando la suscrita accionante obtuvo un excelente puntaje en el cargo a que me presente y que me lleva a ocupar a la fecha el primer lugar es así como en el trámite que se

surta en primera y segunda instancia de la acción de tutela, **puede expedirse la lista de elegibles y por ende perder así mi derecho a ser nombrada en el cargo por mérito**, en este caso me encuentro ante un perjuicio irremediable, ya que si se llegare a presentar, se violarían mis derechos fundamentales invocados como vulnerados al haber agotado todas las posibilidades administrativas ante las entidades aquí demandadas, y **con el fin de evitar el perjuicio irremediable** que se ocasiona, con la interposición de una demanda contenciosa que dura años, en caso de no ampararme mis derechos fundamentales invocados como violados y concederme la medida provisional implorada, sin lugar a dudas **se me generaría un perjuicio irremediable**, como el que pudiere ocasionarse aquí, en el evento que de no ser admitida.

Cabe resaltar que estamos frente a una total falta de celeridad de las entidades demandadas, es bueno recordar que a la fecha mis derechos fundamentales invocados como vulnerados están siendo gravemente afectados, por la no aplicación de la norma más favorable a la luz de la normatividad legal vigente, porque con esta se garantizaría, para mi caso el desarrollo de los principios del mérito y transparencia de la función pública y al no tener un camino más expedito para proteger de inmediato mis derechos fundamentales acudo a usted señor Juez para su protección.

Es por ello, que solicito a usted señor Juez de manera comedida y atenta, ordene a quien corresponda y de manera prioritaria e inmediata, **LA APLICACIÓN DE LA MEDIDA PREVIA DE SUSPENSIÓN DEL PROCESO** hasta tanto exista un fallo dentro de la acción constitucional y se resuelva de fondo el asunto puesto en análisis y protección del Juez Constitucional, hasta que determine en base a las argumentaciones que expuse mi inclusión en la lista de elegibles de la OPEC 47029

PRUEBAS

Señor Juez con las pruebas que apporto pretendo demostrar que cuento con el requisito de estudio el cual es un título profesional “o” profesional en Salud Ocupacional

1. Acuerdo No 20181000007566 del 7 de diciembre de 2018 del proceso de selección 834 de 2018.
2. Funciones y requisitos para la OPEC 47029.
3. Reclamación a la Comisión Nacional del servicio civil sobre resultados VRM Concurso Público de méritos. Opec 47029.
4. Respuesta de la ESAP frente a la reclamación sobre resultados VRM Concurso Público de méritos 47029 de fecha 7 de septiembre de 2022.
5. Manual de funciones del cargo.
6. EI ABCE LICENCIAS SALUD OCUPACIONAL el cual no ha sido derogado como la Resolución 4502 del 28 de diciembre de 2012, del Ministerio de Salud a través de la Subdirección de Riesgos Laborales de noviembre de 2015 vigente para la fecha de los hechos.
7. Pensum académico de mi carrera en Administración en Salud ocupacional.
8. Resolución 754 de 2021 y 1151 de 2022 del Ministerio de Salud y Protección Social

DE OFICIO:

Las demás que el señor juez considere pertinentes y conducentes en este proceso.

Señor Juez como EL DEBIDO PROCESO es uno de los aspecto centrales de la INADMISIÓN por parte de la CNSC y este corresponde al desconocimiento de mi título profesional y las dudas que dé él se desprenden para la CNSC Y LA ESAP, a pesar de encontrarse debidamente certificado conforme a la luz de la normatividad legal vigente, por ello se requiere de su señoría, que en el ámbito de su

competencias proceda a solicitar a las entidades aquí, demandas, **EL PROTOCOLO DE EVALUACIÓN QUE APLICÓ LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA “ESAP” en mi caso específico**, el cual se solicite por la suscrita participante por escrito, pero que fue negado bajo el argumento de ser reservado, esto con el fin de determinar si estas entidades evaluaron en debida forma mi título profesional conforme a las normas que rigen las diferentes profesiones y títulos profesionales en salud ocupacional, así como mi hoja de vida a la luz de la normatividad legal vigente y en caso de presentar dudas mi pensum académico, a fin de que se determine el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en el cargo, pues en mi caso se está configurando un desconocimiento de un principio general del derecho y la aplicación de la Ley en el tiempo, el cual se encuentra establecido en **nuestro ordenamiento jurídico y es que en caso de duda en la interpretación, deberá aplicarse la norma favorable a los intereses del concursante en aras de dar aplicación, al principio de favorabilidad se consagra en materia laboral, no sólo a nivel constitucional sino también legal, el cual por analogía puede ser aplicado al caso y que determina en cada caso concreto, cuál norma es más ventajosa o benéfica para el trabajador.**

Por su parte se me de aplicación al principio in dubio pro operario (favorabilidad en sentido amplio), el cual implica que una o varias disposiciones jurídicas aplicables a un caso, permiten la adscripción de diversas interpretaciones razonables dentro de su contenido normativo, generando duda en el operador jurídico sobre cuál hermenéutica escoger.

En esta hipótesis el intérprete debe elegir la interpretación que mayor amparo otorgue al trabajador en el caso concreto al concursan, mientras el principio de favorabilidad en sentido estricto recae sobre la selección de una determinada disposición jurídica, el principio in dubio pro operario lo hace sobre el ejercicio interpretativo efectuado por el juzgador al identificar el contenido normativo de una disposición jurídica.

ANEXOS

- * Cédula de ciudadanía

COMPETENCIA

Es usted señor(a) juez(a) competente de conformidad con el inciso tercero del numeral 1 del artículo 1 del decreto 1382 de 2000.

JURAMENTO

De conformidad con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, manifiesto bajo la gravedad del juramento, que no ha presentado otra acción de tutela respecto de los mismos hechos y derechos.

NOTIFICACIONES

1. Principalmente al correo iec-mar@hotmail.com
2. Comisión Nacional del Servicio Civil: notificacionesjudiciales@cnscc.gov.co
3. Subsidiariamente a la Dirección: **carrera 104 N° 86- A 03, Barrio Paraíso, Chigorodó-Antioquia.**
4. **ESAP:notificacionesjudiciales@esap.gov.co**

Atentamente,

Jessica Cardona U.

JESSICA MARCELA CARDONA VÁSQUEZ
C.C: 1.040.362.748